

Creative State: Forty Years of Migration and Development Policy in Morocco and Mexico

Natasha Iskander, 2010, Ithaca, Cornell University Press.

Josefina Pérez Espino
El Colegio de la Frontera Norte

El desarrollo local en el país de origen a partir de la activa participación del migrante es el eje central en el análisis de la evolución de una política migratoria del Estado hacia su población en el extranjero. La obra se desarrolla en una temporalidad de 40 años a partir de 1963, cuando Marruecos firmó acuerdos migratorios para exportar mano de obra a países europeos y México finalizó el acuerdo propio con Estados Unidos. El análisis comparativo lo divide en etapas de cambios políticos significativos para cada uno de los dos países, de tal forma que sean estas variables políticas las que expliquen la relación diáspora-Estado. A pesar de que Marruecos y México tienen una organización política distinta—siendo el primero monarquía, y el segundo, república federativa—, la comparación permite el análisis

del desarrollo de relaciones entre el Estado y las zonas de alta emigración en los países de origen a partir del fortalecimiento de lealtades de los poderes locales en zonas rurales. Aún más, Natasha Iskander explica, a través de la historia de la emigración en ambos países, una política central que influye en la selectividad de zonas rurales y/o urbanas a partir de fomentar la contratación de mano de obra y aliviar la concentración de niveles de desempleo y tensión política.

En el devenir histórico de la emigración marroquí a Europa, Iskander explica cómo la contratación de mano de obra por parte de empresas europeas fue la solución idónea por parte de un gobierno autoritario de reciente independencia para controlar el Ejército de Liberación de las tribus bereberes en la zona montañosa del Rif. Por

otro lado, el factor del desempleo fue otra variable que conformó el mapa de la emigración selectiva. Un programa de desarrollo nacional para Marruecos terminó proporcionando un mapa de las zonas con mayor índice de desempleo y con mayor propensión a la rebelión política contra la élite rural principalmente, de ahí que zonas como Meknes, Oudja o Taza se dibujan como las primeras fuentes de mano de obra para contratistas belgas y alemanes a principios de los sesenta.

En el caso de México, el desempleo en zonas rurales del país por un lado y, por el otro, el desarrollo de zonas agrícolas y la construcción de vías ferroviarias en Estados Unidos fueron los factores determinantes para la conformación de zonas de tradición migratoria. Así, mientras el mercado estadounidense demandaba mayores cuotas de trabajadores mexicanos con la inserción de la agroindustria de Texas en el *Acuerdo de Braceros*, como generalmente se categoriza a los acuerdos de trabajo temporal durante la época de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano había seleccionado los mercados locales para llenar estas cuotas, especialmente en zonas rurales de los estados que hoy conocemos

como entidades con tradición migratoria: Zacatecas, Michoacán y Jalisco, entre otros.

En la evolución de los flujos migratorios marroquí y mexicano, se distinguen etapas que muestran un diálogo que va del conflicto —pasando por la evasión— a la cooperación con la diáspora. En ambos casos, el Estado buscó el control de la emigración de su población a través de los acuerdos laborales, ya fuera para vigilar las actividades de los grupos rebeldes bereberes, como en el caso de Marruecos, o para controlar las cuotas de empleo en los estados de México con mayor desempleo o tensiones sociales. Sin embargo, en otro momento, migrantes en el extranjero no recibieron la atención de sus gobiernos, e incluso, en el caso marroquí, fueron discriminados como clientes del Banco Popular, o simplemente excluidos de la agenda nacional en el caso de México. De manera coincidente, este último panorama se visualiza en la etapa inicial que analiza la autora.

En la década de los noventa del siglo xx, las relaciones Estado-diáspora se modifican a partir de los activos políticos o económicos que ofrecen sus nacionales en el extranjero. De esta forma, Iskander destaca esta relación en el marco

de interacciones delimitadas por factores políticos y/o económicos para explicar cómo los gobiernos marroquí y mexicano buscan un acercamiento con la población en el extranjero dentro de marcos institucionales. El cambio en la relación de poder entre el gobierno y la diáspora se explica por la organización de la misma población en el extranjero, que una vez que avanza en la adquisición de sus derechos ciudadanos, les permite organizarse bajo causas cívicas, culturales y políticas. En el caso de Marruecos, este cambio se reflejó en la disminución de remesas a partir de la desvinculación de la población migrante con el Estado. La respuesta del rey Hassan II fue alentar un sentimiento nacionalista para mantener los lazos con el país de origen. Sin embargo, los mecanismos para mantener un control sobre los migrantes marroquíes en Europa desde el mismo Marruecos, habían fallado en su cooptación cuando los sindicatos de trabajadores marroquíes se convirtieron en una aparente amenaza para el Estado.

El desencanto de la diáspora con el gobierno marroquí, aunado a su poder de organización, explica los inicios del desarrollo local llevado a cabo por los mismos migrantes. Las zonas rurales de ma-

yor expulsión eran también zonas marginadas fuera del “Marruecos útil”. De ahí que cuando los trabajadores marroquíes fueron despedidos en Francia a mediados de los ochenta, un grupo de ellos comenzaron a planear su regreso a su lugar de origen y a emprender una transformación económica en la zona. Los inicios de este retorno se sitúan en el Souss, en donde los proyectos de electrificación y dotación de agua potable para la agricultura fueron los pilares del desarrollo local. Así, una fase de acercamiento con el gobierno marroquí da inicio con una reestructuración de los poderes locales a partir de las bases de migrantes marroquíes.

Los migrantes mexicanos, al igual que los marroquíes, son analizados en su dimensión como agentes de desarrollo que demandan una respuesta del gobierno para su inclusión y son capaces de transformar su entorno gracias a la organización comunal. En el ámbito regional, grupos de migrantes como los zacatecanos demuestran una capacidad de negociación con el gobierno estatal con base en sus aportaciones de remesas para obras de interés común. Las dimensiones que maneja la autora para comparar los dos casos llevan a la conclusión de que el migrante

es un actor con un escenario político transnacional inevitable de eludir por parte del gobierno. Más aún, su autonomía como agente de desarrollo puede ser ajena a la acción coadyuvante del gobierno; sin embargo, en ambos casos, el Estado fue creativo como para poder evolucionar en esta relación con la diáspora e involucrarla en las esferas política y económica. Las remesas son un activo que se transforma en un poder tácito para lograr que las demandas de los migrantes sean escuchadas y trasciendan en el bienestar de sus comunidades de origen.

De manera coincidente, la entrada en el nuevo siglo trajo cambios políticos radicales tanto para Marruecos como para México, que influyeron decisivamente en la relación Estado-diáspora y en la actuación del migrante como agente de desarrollo de sus comunidades de origen. En 1999, con la muerte de Hassan II, la toma del trono por parte de Mohammed VI significó una nueva era de *modernización* en Marruecos, la esperanza de una transición democrática y el final de un gobierno autoritario y represivo. Bajo esta interpretación, la población marroquí en el extranjero inició el proceso de un diálogo más cercano y abierto con el Estado a partir de institu-

ciones creadas y fortalecidas específicamente para atraer mayor afluencia de migrantes en retorno y remesas. En el caso de México, la obra también compara el cambio político que provocó el fin del mandato de un solo partido en el poder por cerca de 70 años. El nuevo presidente, Vicente Fox, había prometido en su campaña un mayor acercamiento con la población mexicana en Estados Unidos. El nuevo gobierno procuró una nueva estructura institucional que tomó como base las iniciativas desarrolladas en los dos sexenios anteriores para lanzar un programa de desarrollo local en zonas de emigración. El Programa 3 x 1 fue el modelo a seguir, en el cual se procuraba la aportación de fondos del gobierno equiparables a los de los migrantes organizados en clubes o asociaciones.

La institucionalización de mecanismos de diálogo político entre el Estado y la población nacional en el extranjero es comparable en los casos de México y Marruecos. Un ejemplo es la creación de sendas instituciones dedicadas especialmente a ese diálogo: en el caso marroquí, la Oficina de Marroquíes en el Extranjero y, en el caso de México, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, ambas dependientes del Ministerio y Se-

cretaría de Relaciones Exteriores, de manera correspondiente. Sin embargo, la interpretación de ese diálogo aparece dentro de una estructura mucho más patriarcal en el caso de Marruecos, en donde el rey Mohammed II y la Fundación Hassan II son los pilares de la relación entre el soberano y sus súbditos. En cambio, en el caso de México, la estructura gubernamental y de atención por parte de partidos políticos aparece mucho más compleja.

Por esta razón, el análisis de la obra tiende a expandirse en su última sección sobre el caso de México. Una de las observaciones se refiere a la continuidad de un diálogo que inicia en el estado de Zacatecas como una comunidad pionera en la institucionalización de la atención a la población migrante y sus familias en las comunidades. Comparativamente, los migrantes de retorno que fundaron la organización Migración y Desarrollo en Marruecos en los años ochenta y los clubes de zaca-

tecanos en Los Ángeles se asemejan en sus iniciativas de gasto e inversión en actividades comunales. Por un lado, el capital social y político que representa el envío de remesas a sus comunidades les ofrece no sólo mantener lazos sino también adquirir derechos políticos que se verán reflejados en posiciones de elección popular.

De ahí que la autora haga mayor hincapié en la evolución de estos grupos como actores tanto del desarrollo local de sus comunidades como de su involucramiento en la vida política local. En ambos casos, la apertura democrática que inicia con la entrada al siglo XXI es el punto de partida para una relación compleja y, al mismo tiempo, más cercana entre el Estado y la diáspora. Sin embargo, esta fase sólo se explica a partir de que evoluciona la percepción sobre la población migrante en el exterior y la misma lucha del migrante por ser efectivamente un agente de desarrollo local con derechos políticos.